

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

El acontecimiento político más importante del mes de octubre ha sido, sin duda, el fracaso de la moción de censura presentado contra el gobierno de coalición presidido por Emil Boc. La moción no consiguió su objetivo, sin embargo, por un escaso margen. Se necesitaban 236 votos, y sólo 218 parlamentarios votaron contra el gobierno, es decir, estrictamente los parlamentarios de los partidos de la oposición.

En opinión de algunos comentaristas, esta vez el Premier Boc salvó la situación ordenando a los parlamentarios de su partido que se abstuvieran en la votación, lo que disipó las especulaciones de los días anteriores sobre el número de parlamentarios del partido de los gobiernos dispuestos a votar contra éste.

Todos los comentaristas políticos han destacado en primer plano la sensación de alivio experimentada sobre todo en medios financieros por el fracaso de la moción. La analista de Crédito Europeo, Georgiana Constantinescu señaló que la victoria del gobierno había sido una señal positiva para los inversores extranjeros, especialmente teniendo en cuenta la actual revisión de los planes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Rumanía y la absoluta necesidad de la previsibilidad, la estabilidad y la coherencia en la política.

Efectivamente, con unos 6.000 millones de euros pendientes de entregar con cargo al préstamo otorgado en marzo del 2009 por el FMI, el grueso de las medidas de reforma estructural que avalan dicho préstamo aún pendientes y con una salida de la crisis económica aún lejana para Rumanía, parece que lo menos aconsejable en este momento sería abrir una nueva crisis política que condujera al país a una situación de parálisis parecida a la del mes de octubre del año pasado. En el 2009, tras la caída del gobierno por otra moción de censura, fueron necesarios casi cuatro meses para que el país recuperase el pulso político, que sólo se logró tras la renovada victoria electoral de Traian Basescu en las elecciones presidenciales. En las circunstancias actuales, con una caída en picado de la popularidad del primer mandatario y una ola creciente de protestas por la política de recortes del gobierno, nadie sabe el tiempo que podría hacer falta para recuperar la iniciativa y la gobernabilidad.

Sin embargo, parece que esta situación de estabilidad política ocultaría en realidad graves amenazas que evolucionan solapadamente al compás de los acontecimientos.

Por una parte, la crisis que afecta seriamente al partido mayoritario de la coalición, el PDL, comienza a amenazar directamente al elemento que hasta ahora ha demostrado una mayor estabilidad y solidez dentro del contexto político, es decir, el liderazgo indiscutido del Presidente Basescu, y está revelando la existencia de una reacción de desunión y disolución en las filas del partido. No pretendo extenderme sobre este asunto

y sobre la progresiva sectarización que se está produciendo en el PDL, de la que los rasgos más sobresalientes serían el atrincheramiento del sector histórico, definitivamente fuera del gobierno tras la dimisión –sobrevvenida o propiciada- de su último representante, el ex ministro de Interior Vasile Blaga, y el lanzamiento de la opción democristiana por el actual ministro de Exteriores, Teodor Baconschi. Esta situación ya fue comentada en el la reseña anterior. (Ver reseña informativa de septiembre, 2010).

En segundo lugar, la política de austeridad con recortes de los gastos sociales, reducción del gasto público e incremento de los impuestos, está afectando también a la solidez de la coalición de gobierno, que es la que permitió al premier Emil Boc superar por escaso margen la moción de censura. Tras las declaraciones del Vice primer ministro y líder de la minoría húngara, Marko Bela negándose a prolongar las medidas de austeridad más impopulares más allá del 2010, recientemente amenazó con abandonar la coalición si no se llevaba a cabo la aprobación urgente de la Ley de Educación. El apoyo de la minoría húngara a la coalición gubernamental corre parejo a que se vayan cumpliendo los objetivos estratégicos de consolidación de los derechos de la minoría húngara en Rumanía, pero incluso este objetivo podría verse postergado en caso de que un acrecentamiento de las protestas sociales por la política de austeridad (que lógicamente también afecta a la minoría húngara) volviera poco aconsejable seguir respaldando al gobierno de Emil Boc.

En tercer lugar, la ineficacia del gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales acordadas con el FMI están llevando al país a una situación de perplejidad, en la que se da la paradoja de que parece como si ya se estuvieran sufriendo desde hace tiempo las consecuencias de las reformas, pero sin que en realidad se hayan llevado todavía a cabo. El largo recorrido de la Ley de retribuciones de los empleados públicos o de la Reforma de las Pensiones, con el rosario de medidas de urgencia que el propio gobierno se está viendo obligado a aplicar para prevenir los efectos de la demora en su entrada en vigor, está produciendo este curioso efecto en la opinión pública.

Una inmediata consecuencia de dicho fenómeno es el nuevo carácter que están adquiriendo las movilizaciones populares. Por un lado, la ciudadanía ha estado asistiendo, atónita, a la generalización de las movilizaciones entre los servidores del aparato del estado. Médicos, maestros, pero sobre todo policías, han robado el protagonismo a trabajadores, campesinos, pensionistas o estudiantes, a la hora de echarse a la calle a protestar contra el gobierno. Este hecho, totalmente inédito, más aún que el inusitado incremento del volumen de las movilizaciones, es el rasgo más novedoso que el hombre de la calle ha podido contemplar durante el mes de octubre en Bucarest y en las grandes ciudades del país.

Esto se pudo ver claramente en las movilizaciones durante los meses de septiembre y de octubre. Pero además, durante la votación de la moción de censura, se pudo observar otro rasgo importante y también de última hora.. Abandonando su tradicional dogmatismo, que en general les había impedido plantearse hasta ahora acciones conjuntas, las centrales sindicales acordaron una movilización general de marcado carácter político que sacó a las calles de Bucarest y llevó frente al Palacio del Parlamento a cerca de 80.000 manifestantes venidos de todo el país, en una demostración de unanimidad y voluntad de presión popular

sin precedentes, tanto por el esfuerzo desplegado en la convocatoria, la unidad de acción, como por la vinculación de la protesta a un hecho político como era la censura del gobierno.

Por lo que respecta a este último, a pesar de la tormenta, tanto aparente como soterrada, su programa político se mantiene sin variaciones, como no podía ser de otro modo en virtud de la naturaleza de la estrategia adoptada, en el contexto de sus compromisos con el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea.

La necesidad de conservar el apoyo financiero que hasta ahora ha evitado la bancarrota económica, al mismo tiempo que mantener sus objetivos de convergencia, sobre todo el ingreso en el espacio de Shengen, ha condicionado toda la estrategia del gobierno de coalición. Empobrecimiento progresivo de la población, pérdida de apoyo popular, acrecentamiento de las rencillas domésticas dentro de las formaciones políticas, incluso pérdida de prestigio internacional, por la escasa reacción ante la expulsión de ciudadanos de etnia romá por el gobierno de Francia, para evitar los riesgos que un enfrentamiento contra este último pueda suponer en la consecución de sus objetivos políticos de convergencia, es la crecida factura que el gobierno de Emil Boc y también el Presidente Basescu están comenzando a pagar como contrapartida a su programa político.

Sólo el relativo desinterés de la población rumana por la política, su proverbial fatalismo cimentado en una desconfianza profunda en los partidos políticos y en las instituciones, así como la escasa credibilidad de una alternativa de la oposición más allá de la operación de acoso y derribo del gobierno en que se haya enfrascada, parece capaz de proporcionar a este último un respiro.

La oposición parlamentaria está formada por un partido mayoritario, el PSD y dos minoritarios, PNL y el pequeño Partido Conservador. En total, los 218 parlamentarios que votaron a favor de censurar al gobierno el pasado octubre. Este bloque de la oposición existe como tal desde que en octubre del 2009 se formó para conseguir la caída del gobierno en una moción de censura similar. En aquella ocasión consiguió su objetivo, aunque no el de doblegar la terca voluntad del Presidente Basescu que ignorando la correlación de fuerzas adversas en el Parlamento, y las presiones para aceptar la solución de compromiso que se le ofrecía, consiguió prolongar durante tres meses la interinidad de un Poder ejecutivo tocado en su línea de flotación y disminuido en sus prerrogativas hasta lograr una nueva mayoría parlamentaria gracias al respaldo obtenido, en su reelección en las presidenciales.

Tres meses de incertidumbre política y de parálisis administrativa, en un momento muy crítico para la economía rumana, y la convicción de las fuerzas de la oposición de que el principal y más formidable obstáculo para obtener el poder no era ya el Partido mayoritario, ni siquiera la propia coalición de gobierno, sino la figura del Presidente.

En consecuencia, la oposición política en Rumanía se ha venido transformando cada vez más en una oposición "anti-Basescu", que hace personalmente responsable al Jefe del Estado de toda la estrategia del

gobierno de coalición, sin que sea posible estar seguro, detrás de todo ello, de que haya una alternativa de gobierno viable o al menos diferente a la que ahora se cuestiona.

Los dirigentes del PSD, PNL y PC han adoptado una estrategia consistente en negarse a cualquier interlocución con el Presidente, incluso cuando este ha intentado ejercitar sus prerrogativas constitucionales llamando a consulta a los representantes de las minorías parlamentarias. La oposición insiste en que Basescu, debido a su parcialidad, ha perdido su condición de presidente de todos los rumanos, ya sólo representa a su propio partido y es personalmente responsable de la estrategia gubernamental que está consiguiendo empobrecer a amplias capas de la población.

El momento más álgido de este enfrentamiento surgió como consecuencia de la aprobación por la Cámara de Diputados, del proyecto de Ley de reforma del Sistema de Pensiones públicas. El proyecto salió aprobado por 180 votos, siendo así que tan sólo unos 80 diputados se encontraban presentes en la sala en ese momento. El líder del PSD, Victor Ponta, conjuntamente el del PNL, Crin Antonescu, reclamaron inmediatamente la invalidez de la votación y, ante la negativa de la Presidenta de la Cámara, la destitución de ésta. Seguidamente, amenazaron con llevar a delante una petición de destitución del propio Jefe del Estado si éste se atrevía a sancionar y hacer entrar en vigor la Ley aprobada. Basescu se negó a reemplazar a Roberta Anastase, Presidenta de la Cámara y miembro de su propio partido, pero optó por devolver la Ley al Parlamento argumentando otros motivos secundarios de carácter técnico. La oposición, sin embargo, se ha negado desde entonces a dialogar con el Presidente e incluso a asistir a las solemnes sesiones parlamentarias extraordinarias en las que Jefe del Estado ha pedido dirigirse al Parlamento.

Ahora bien, detrás de esta aparente unanimidad de las fuerzas políticas de la oposición contra Basescu, más aún incluso que contra el propio gobierno, los medios de comunicación y los analistas políticos se preguntan qué solidez puede tener un compromiso político entre fuerzas tan dispares y qué viabilidad y qué posibilidades tendría un gobierno formado por la oposición de poder desarrollar una estrategia política y económica sustancialmente diferente a la que está llevando a cabo el ejecutivo actual.

En efecto, PSD y PNL, no sólo tienen una visión del mundo radicalmente diferente, encontrándose ambos en las antípodas del espectro ideológico, en torno a la socialdemocracia uno y al centro- derecha de corte liberal el otro, sino que tienen diferencias de estrategia e incluso táctica muy diferentes. Si bien ello no es obstáculo, como ya se ha visto en la Historia reciente de este país, para llevar a delante experiencias de "cohabitación política" de cierta duración, lo cierto es que las diferencias ideológicas cobran una mayor importancia en un momento en que es necesario acometer reformas estructurales. Por poner un ejemplo de los temas que enfrentan a ambas formaciones, veamos brevemente la problemática en torno al modelo del sistema tributario. Rumanía es, junto con la República Checa, el único estado de la U.E. que aún no se ha decidido adoptar un sistema de fiscalidad progresiva. Esto ha servido a analistas y observadores para explicar los pocos recursos de que dispone la Administración para recaudar impuestos y, en consecuencia las dificultades que tiene el Estado para nivelar el Presupuesto. Para hacerse una idea de la trascendencia de este asunto, se ha afirmado que un sistema fiscal progresivo hubiese sido capaz de evitar medidas tan

drásticas como la rebaja de un 25% del salario de los empleados públicos o el incremento de cuatro puntos en el IVA, además de otros muchos recortes del gasto social. Los partidarios del sistema progresivo afirman que el problema no está tanto en el volumen de los gastos sociales como en la escasez de recursos, de la que sería responsable en buena parte el sistema fiscal actual. Los partidarios de éste último insisten, sin embargo, en que se trata de uno de los rasgos más importantes de la ventaja comparativa de Rumanía en el ámbito de la Economía internacional y el que junto con los bajos salarios y costes sociales, es el principal motor para atraer las inversiones extranjeras. Al frente de ambas opiniones se encuentran estas dos formaciones políticas. Los socialdemócratas, partidarios de la adopción de un sistema de fiscalidad progresivo. Los liberales, decididos defensores de mantener el sistema actual de fiscalidad fija.

Junto a este, existen otros muchos temas de fondo que enfrentan a PSD y PNL y que, en opinión de muchos comentaristas, quitan toda confianza a la posibilidad de una alternativa de gobierno sólida y duradera que estos dos partidos pudieran encabezar más allá de una hipotética caída de la coalición actual. La repetida alternativa de un gobierno de técnicos encabezado por un independiente (el candidato sería Klaus Johannis, el actual alcalde de Sibiu, que ya fue propuesto durante la crisis de finales del 2009) parece reforzar esta opinión, pues, ¿qué futuro podría tener semejante gobierno, tutelado por unos, acosado por una oposición poderosa, sin el apoyo del Jefe del Estado, en un contexto de profunda crisis política y económica y obligado a aplicar medidas de escasa popularidad?

El hecho incontrovertido es que difícilmente, en la situación actual, parece posible que cualquier gobierno, del signo que sea, pueda tener un margen demasiado amplio a la hora de aplicar una estrategia política condicionada por los compromisos internacionales adquiridos por Rumanía y la necesidad de aplicar recetas económicas capaces de sacar al país de la crisis económica en un tiempo razonable.

Situación económica

El acontecimiento más importante ocurrido durante el mes de octubre ha sido sin duda la visita de la comisión del FMI, para evaluar el cumplimiento de las condiciones acordadas con Rumanía para el libramiento sucesivo de las partidas del préstamo otorgado en marzo del 2009. Esto es así porque la Economía de este país en estos momentos gira en torno a la reestructuración y las medidas de reforma pactadas con las entidades financieras internacionales como consecuencia del préstamo concedido a Rumanía en marzo del 2009. Las consecuencias de estas medidas se dejan sentir en la vida económica, política y social de tal manera, que la visita de la delegación del FMI se convierte habitualmente en el epicentro de la vida política y económica de este país.

Como resultado de dicha visita, el FMI expresó su satisfacción por los progresos realizados por el gobierno en la dirección de la política económica acordada, pero acordó supeditar las siguientes entregas al cumplimiento por Rumanía de las reformas prometidas. O lo que es lo mismo, el FMI ha detectado que las medidas de reforma estructural no se están acabando de cumplir. En este momento, las medidas que el gobierno debe adoptar son medidas de carácter estructural que garanticen el límite del déficit público y de

endeudamiento de la economía rumana. Básicamente, consisten en la aprobación de la reforma de las pensiones públicas, del establecimiento de un sistema retributivo único para los empleados públicos y la aprobación del presupuesto del Estado para el 2011.

En esta clave, se han producido durante el mes de octubre apariciones sucesivas ante los medios de comunicación de autoridades y miembros del gobierno, presentando sus puntos de vista respecto a la situación de la Economía rumana.

En el curso de su intervención en un seminario organizado por "Ziarul Finanziar", el Presidente Basescu sintetizó una relación de los problemas a su juicio, más importantes.

Refiriéndose a las dificultades surgidas para llevar adelante las medidas políticas y legislativas necesarias para cumplir sus compromisos internacionales, señaló que las principales dificultades surgidas en las negociaciones con el FMI provienen del hecho de que los órganos judiciales acostumbran a interferir masiva y continuamente, sin base jurídica o constitucional alguna, en la estrategia en materia económica que decide el gobierno o aprueba el parlamento. Señaló como ejemplo las enmiendas a los proyectos de reforma que, como en materia de pensiones, se introducen a través de decisiones de los órganos judiciales tratando de modificar o invalidar ordenanzas gubernamentales o proyectos legislativos del parlamento, por más que dichas decisiones no hacen sino introducir excepciones en las que se encuentran los propios miembros de la magistratura. El Jefe del Estado señaló que este es un problema pendiente que el Estado deberá resolver sin tardanza.

Otro de los temas fundamentales mencionados por el Jefe del Estado fue la generalización de la práctica de las empresas consistente en burlar la Ley, que se ha convertido en casi un ejercicio obligado. A este respecto, señaló que en Rumania, el trabajo ilegal y la evasión de impuestos es una práctica común en el mundo empresarial. "Cuando 4,5 millones de personas están registradas formalmente como población activa, pero hay 1,6 millón más que va a trabajar todos los días sin estar registrado, es que tenemos un problema muy serio que el Estado debe atajar", aseguró el Presidente.

Refiriéndose a las predicciones del crecimiento económico, el Presidente se mostró hasta cierto punto optimista, citando las cifras avanzadas por el FMI y la Comisión europea, que han pronosticado un crecimiento del 1,5% del PIB para el 2011. Sin embargo, señaló que no cualquier crecimiento debía ser considerado positivo, señalando como tal sólo si aquél venía dado como consecuencia de las inversiones. Declaró que era preferible un índice de crecimiento del 1% si éste venía producido por inversiones. A este respecto animó a los inversores extranjeros a involucrarse más en el desarrollo de la economía rumana.

Basescu culpabilizó a la Banca comercial por su política de concesión de créditos durante los años 2007 y 2008 a la población, que ocasionó un crecimiento de la economía basado exclusivamente en el consumo, con el resultado de una rápida y pronunciada caída posterior.

Basescu se refirió también a las pensiones y a los gastos sociales y a su tratamiento en el presupuesto del 2011. Señaló que en presupuestos anteriores, el 45% del Gasto estaba destinado a costes sociales, incluyendo entre éstos las pensiones. Los objetivos para el 2011 apuntan a una reducción drástica de los costes sociales, pero sin que ello signifique tocar las pensiones.

La Presidenta del Consejo de Inversores extranjeros, Mariana Gheorge, presentó a los medios un informe relativo a un conjunto de 12 medidas económicas propuestas al gobierno, de las que podría derivarse un crecimiento del PIB en un 11,6 % hasta el 2015, la creación de unos 250.000 puestos de trabajo y un incremento de los ingresos del Presupuesto del Estado calculado en un 8,5 %.

El documento del CIE contiene un número de medidas prioritarias para el establecimiento de un marco macroeconómico que haga posible los resultados de crecimiento señalados.

Por su parte, el asesor del Gobernador del Banco Nacional, Lucian Crotoriu, durante una conferencia especializada, señaló que el potencial de crecimiento de la Economía rumana a corto plazo no puede ser superior al 1%, debido al hecho de que el sector privado continúa sin recuperarse. A largo plazo, el potencial de crecimiento se estima en torno al 4 %.

Con ocasión de su intervención en el seminario organizado por el Foro de la Construcción de Rumanía, la ministra de Desarrollo regional y Turismo, Elena Udrea, dijo que el mercado de la construcción experimentará una recuperación el año próximo, en el contexto de una estabilización económica generalizada. Añadió que las restricciones del Presupuesto habían hecho imposible hacer lo que hubiera sido necesario para ayudar al sector de la construcción a operar normalmente, pero que entre tanto se había aprovechado el tiempo desarrollando una completa regulación del sector. Entre éstas, un proyecto de ley autorizando a los ayuntamientos a renovar las fachadas de propiedad privada con su propio presupuesto, y la posibilidad de recuperar las sumas invertidas con posterioridad, incluso mediante la ejecución de la propiedad.

Las estadísticas demuestran que el mercado de la construcción cayó en el 2010 entre un 35 y un 45 %, después de otro declive record de las cifras del 2008 al 2009. La Asociación de Contratistas rumanos ARACO, espera que la recuperación del sector comience a producirse, lo más pronto, en el 2012.

Por lo que respecta a la Agricultura, durante la apertura de la 15ª edición de INDAGRA, el ministro de Agricultura, Valeriu Tabara, hizo un breve análisis de la situación del sector, señalando que el precio de los productos alimenticios en Rumanía es excesivo debido a los numerosos intermediarios existentes entre el productor y el consumidor.

Por su parte, un informe del Banco Mundial señaló que la principal dificultad del Ministerio de Agricultura en Rumanía radica en las deficiencias en la estructura de la gestión. Al mismo tiempo, señaló la fragmentación y compartimentación institucional, la complejidad de la estructura administrativa y la escasa calidad de la

comunicación entre departamentos. El BM recomendó la aceleración de la reforma administrativa en lo que concierne sobre todo a las agencias que administran programas internacionales.

Respecto a las inversiones extranjeras, durante los primeros nueve meses del año se contabilizaron en Rumanía entradas de capital por valor de 56 millones de euros, lo que supone un 50% de la cifra registrada en el 2009, ello según datos de la Asociación de inversores privados del Sureste de Europa. Los sectores que registraron las mayores inversiones fueron los servicios médicos y la industria farmacéutica, construcción, energía, comunicaciones y transportes.

Las cifras relativas a la inflación continuaron el ritmo de crecimiento alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística para el mes de septiembre, publicados en octubre, el incremento en relación con el año anterior fue de un 7,88 %. La tasa anual en septiembre fue de 7,77, frente a 7,58 registrada en agosto. La decisión del gobierno de incrementar el IVA del 19 al 24% tiene mucho que ver en esta situación.

Situación social

Un mensaje por no más repetido no menos importante de la delegación del FMI que en octubre visitó Bucarest, versó sobre la necesidad de identificar la corrupción y la evasión fiscal como las dos prioridades necesarias para enfocar una recuperación de la economía.

El acuerdo con el último informe publicado por "Transparencia Internacional", Rumanía se mantiene en lo alto del "ranking" europeo de la corrupción, aunque este año ocupa el tercer lugar, precedida por Bulgaria y Grecia. Si bien esto bien podría hablar a favor de los progresos hechos en Rumanía este campo, para el ciudadano rumano, la realidad continúa siendo la misma.

En Rumanía, la corrupción continúa siendo un hecho con el que el ciudadano debe enfrentarse día tras día, desde que sale de casa hasta que vuelve de su trabajo. Durante los dos últimos años la Dirección Anticorrupción (DNA) ha abierto expediente a oficiales de policía, inspectores fiscales, magistrados, empleados de los servicios de inteligencia, parlamentarios y funcionarios de la administración local. Sin embargo, resulta extraño encontrar expedientes que se refieran a personal sanitario de los servicios públicos de salud o a profesores de enseñanza, donde el robo y la extorsión son la regla habitual.

Según "Transparencia Internacional", cerca de la cuarta parte de los ciudadanos de Rumanía admiten haber sido objeto de extorsión cuando tuvieron que ir al médico durante el pasado año; un 13% cuando fueron a la policía; un 8% en su relación con magistrados y un 6% con profesores. No es difícil concluir que los casos perseguidos por los fiscales constituyen tan solo la punta del iceberg de la corrupción en Rumanía.

Está meridianamente claro que la mayoría de los extorsionados renuncian a denunciar la extorsión y tal parece que los rumanos se encuentren inmersos en un sistema de corrupción y venganza que prevalece como código no escrito.

La situación en el sector de la salud es característica de esto mismo. Formalmente, el acceso a los servicios médicos está garantizado por la Constitución y su disfrute es gratuito para aquellos que estén asegurados en el sistema de Salud público. La realidad es muy distinta, y muchos de los servicios, como el de cirugía, se encuentran “regulados” por tarifas de precios conocidas por pacientes y cirujanos, que pueden ir desde los 100 a los 2000 euros en función de lo complicado de la intervención. El coste de otros servicios se encuentra fijado en función de otros tantos criterios, como la edad del paciente y otras consideraciones que van contra el derecho de los usuarios al acceso en pie de igualdad a los servicios médicos que garantizan las leyes. Con la caída del nivel de vida del personal sanitario (acentuada por las últimas medidas de recorte de salarios en un 25 %) los pagos ilegales a médicos y enfermeras en los hospitales y clínicas públicas se han convertido en algo automático, algo así como un contrato no escrito entre médico y paciente.

Pero el sistema ha evolucionado de manera perversa hasta alcanzar una situación que nos retrotrae a los tiempos del comunismo. El mero pago ilegal de servicios que deberían ser gratuitos no garantiza por sí solo la atención médica. El pago es un “plus”, que no producirá efecto alguno si el paciente no tiene, además, relaciones.

La realidad es tan evidente, que hace pocos años, un diario de tirada nacional publicó un reportaje con las tarifas ilegales que se practicaban en los diferentes hospitales y clínicas públicas de Bucarest, clasificadas por el tipo de intervención quirúrgica o servicio. Ni uno sólo de los centros, citados por su nombre, se atrevió a presentar una denuncia contra el diario.

Lo primero que uno se pregunta es por qué el paciente sometido a extorsión no denuncia al funcionario que le extorsiona. En el caso de los pagos ilegales en el ámbito de la salud, existen varias explicaciones, desde el fatalismo proverbial del rumano (“las cosas son así”) hasta el hecho de que la vida, o al menos la salud del paciente está en manos de aquel a quien hay que denunciar, sin que haya otra posibilidad.

Los médicos se defienden con el argumento, que puede resultar peregrino para la lógica occidental, pero que esconde una realidad mucho más dramática. El magro salario que el Estado paga a los facultativos (entre 300 y 500 euros) y otro personal sanitario, difícilmente puede justificar el esfuerzo económico y personal de largos años de preparación y estudio. Y si el Estado no paga, ¿Quién iba a hacerlo sino el paciente, beneficiario directo de los servicios?

Otro argumento más poderoso por lo obvio, es que si se procediera penalmente contra todos los médicos y enfermeras que perciben o reclaman pagos ilegales, probablemente no quedaría casi nadie para atender a los pacientes.

La corrupción, sin embargo, es tan sólo un rasgo más de la situación que vive la sociedad rumana.

Las medidas de austeridad anunciadas en los últimos meses por el Gabinete de Emil Boc – reducción de los sueldos de funcionarios públicos, disminución de las pensiones, incremento de los impuestos directos e

indirectos, etc.- (que han provocado una auténtica oleada de manifestaciones de protesta, organizadas por los sindicatos, las fuerzas de orden público, los jubilados, las agrupaciones independientes) ha rebajado de manera extraordinaria el poder adquisitivo de importantes capas de la población.

En una entrevista a L'Humanité, concedida por el presidente de la Central Sindical "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, el dirigente sindical hace el siguiente balance de los recortes salariales ordenados por el gobierno:

"Las bajadas salariales son importantes. Llegan hasta el 35% de los ingresos. Lo que ha hecho aumentar el número de trabajadores que cobran el salario mínimo nacional. Es un círculo vicioso. La disminución del poder adquisitivo compromete las oportunidades de recuperación económica. Sumerge a la mayoría de los funcionarios y a otros empleados públicos, algunos de los cuales han visto caer su salario a 100 euros, en el umbral de pobreza e incluso por debajo".

Preguntado por uno de los proyectos del gobierno, la modificación del Código Laboral, el presidente de cartel Alfa responde:

"El proyecto de modificación de "estatuto del trabajo" y de la ley del contrato colectivo está destinado a flexibilizar el empleo. Permitiría a los empresarios despedir muy fácilmente. Los trabajadores se convertirían de hecho en jornaleros, sin ninguna certeza sobre la estabilidad en el empleo. Además, el proyecto prevé la posibilidad de que el salario varíe de un mes a otro, ¡por la simple decisión del empresario! No habría ninguna responsabilidad del empleador respecto al empleado. Todos los contratos se transformarían en contratos temporales. El proyecto transformaría a los asalariados en esclavos modernos "

Sin duda, ha sido éste el peor momento para idear y llevar a cabo un sondeo sobre la implicación de la opinión pública rumana en la vida política y la evaluación "a posteriori" del régimen comunista de Nicolae Ceausescu, derrocado en diciembre de 1989.

La encuesta, patrocinada por el Instituto para el Estudio de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano, revela, en efecto, que para el 47% ciento de la población el comunismo era un proyecto válido, que falló por culpa del... factor humano encargado de llevarlo a la práctica. Más aún, un 14% ciento no critica siquiera los métodos empleados para la "materialización" del sistema socialista, mientras que un 27% ciento considera que la idea en sí era errónea.

Para los desempleados, el sistema comunista tenía la "ventaja de eliminar la desocupación", ofreciendo empleos estables. En este caso concreto, el porcentaje de nostálgicos es superior al 62%. Un 8% de los encuestados añora las "condiciones de vida decentes" que brindaba el antiguo régimen; un 5% estima que el comunismo ofrecía más igualdad social, mientras que un escaso 4% asegura que, dentro de todo, el marxismo era un... "buen sistema". Sin embargo, el 69% denuncia la falta de libertad imperante en las llamadas "democracias populares".

Mientras un 79% de los rumanos asegura que no ha padecido directamente los efectos del régimen comunista, el 47% asegura que el gobierno de Ceausescu se caracterizó por una elevada tasa de pobreza, escasez de alimentos y servicios públicos eficientes. Un 11% denuncia la confiscación de los bienes; un 6%, las detenciones; un 4%, la falta de libertades individuales; un 2%, las persecuciones políticas y un escaso 1%, la ausencia de perspectivas de desarrollo profesional.

Finalmente, conviene señalar que un tercio de los rumanos aprueba la gestión de Nicolae Ceausescu, mientras que un 15% estima que su política perjudicó los intereses del país. Para la mayoría - un 46% - el Gobierno del dictador “no fue ni bueno ni malo”.

El revelador sondeo pone de manifiesto las lagunas de un proceso de transición política excesivamente rápido, durante el cual se hizo caso omiso de un factor clave: la necesidad de potenciar el desarrollo del tejido social del país. En este contexto, el salto hacia la economía de mercado ha resultado demasiado costoso.